



Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2019 00382 00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES
DEMANDADA: CARMEN GUERRERO HURTADO
VINCULADA: DORA PRISCILA VELASQUEZ MOLANO

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante¹, previas las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpuso la demanda de la referencia, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución No. SUB 2228 de 08 de enero de 2019, a través de la cual la entidad accionante reconoce la pensión de sobrevivientes a la señora CARMEN GUERRERO HURTADO.

Argumenta la entidad demandante que dicho acto administrativo no se ajustó a derecho toda vez que la demandada no acreditó el requisito de convivencia establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. También se narra en el líbelo que la vinculada, señora DORA PRISCILA VELASQUEZ MOLANO, quien presentó solicitud de reconocimiento pensional el 17 de enero de 2019, posterior al reconocimiento de dicha prestación pensional a favor de la demandada.

Dentro del escrito de demanda, la entidad establece el acápite de “*MEDIDA CAUTELAR*” en el cual eleva solicitud de suspensión provisional de la Resolución No. SUB 2228 del 08 de enero de 2019, mediante la cual le reconoció a la señora CARMEN GUERRERO HURTADO una pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 100%, como consecuencia del fallecimiento del señor CAUCALI SOLORZANO HERNANDO.

Sostiene además que el pago de una pensión generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta contra el principio de Estabilidad Financiera del Sistema General de Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 001 de 2005 como obligación del Estado, entendido como el manejo eficiente de los recursos asignados con el objetivo de garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, procurando que las decisiones que afecten dicho sistema como el reconocimiento de prestaciones se adopten teniendo en cuenta los recursos

¹ Dentro del mismo escrito de la demanda



limitados que se distribuyen de conformidad con las necesidades poblacionales, con el objetivo de que los derechos adquiridos se hagan efectivos.

Considera que se configura un perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones, porque dicho sistema debe disponer de flujo permanente de recursos que permita su mantenimiento y adecuado funcionamiento, por lo que continuar con el pago de una mesada pensional sin los presupuestos de ley, afecta gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento, vulnerando en consecuencia el principio de progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

II. EL TRÁMITE SURTIDO

El Despacho a través de providencia de 10 de diciembre de 2019, admitió la demanda formulada por Colpensiones y ordenó la notificación personal a la demandada CARMEN GUERRERO HURTADO y demás sujetos procesales.

Posteriormente, con auto de 18 de febrero de 2021, se dejó sin efectos el numeral tercero del auto admisorio de la demanda, y se ordenó el cumplimiento de los demás numerales del auto admisorio.

Dentro del trámite de traslado de la demanda, el apoderado de la demandada CARMEN GUERRERO HURTADO procedió a contestar la demanda, y dentro de dicho escrito se pronunció sobre la solicitud de suspensión provisional presentada en la demanda.

Sostiene la parte pasiva respecto a la medida cautelar, que es inconstitucional y falta de proporcionalidad, ya que con la misma se afectan derechos como el mínimo vital en conexidad con la vida; y que, de acuerdo con el principio de la buena fe y la jurisprudencia constitucional vigente, sostuvo la Corte Constitucional que la duda debe resolverse a favor de la parte débil de la relación.

III. CUESTIÓN PREVIA: SOBRE EL ACATAMIENTO A LO PREVISTO POR EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 233 DE LA LEY 1437 DE 2011

La norma en cita dispone correr traslado al demandado de la petición de medida cautelar, para ejercer su legítimo derecho de defensa. Al respecto indica que el Juez, *“(...) en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda”*.

Si bien observado el trámite, no se vislumbra que el Despacho en auto aparte, haya dispuesto correr traslado a la demandada de la solicitud de suspensión provisional elevada por la actora, no es menos cierto que al estar contenida dicha petición dentro del escrito de demanda y correrse traslado de la misma a la señora CARMEN



GUERRERO HURTADO, su apoderado en escrito de contestación al libelo, ejerció su derecho de contradicción y defensa pronunciándose acerca de la solicitud de medida cautelar, de cuyos argumentos se colige que, se opone a la prosperidad de la misma.

Así las cosas, el Despacho tiene por puesta en conocimiento la solicitud de suspensión provisional, a la persona demandada CARMEN GUERRERO HURTADO, quien a través de su apoderado ejerció su derecho a la defensa y contradicción oponiéndose a la adopción de la medida solicitada. Lo cual implica la salvaguarda del debido proceso.

IV. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Para efectos de resolver la solicitud de medida cautelar elevada por la entidad demandante, sea lo primero recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, el Juez o Magistrado Ponente, a petición de parte podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Por su parte, el artículo 230 de la misma ley establece que las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, por lo tanto, se podrán decretar cualquiera de las medidas allí señaladas, entre las cuales, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

Además, el artículo 231 ibídem establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento de un derecho y la indemnización de perjuicios, se deberá probar al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Descendiendo al caso concreto se observa que, la entidad demandante pretende la nulidad de la Resolución No. SUB 2228 del 08 de enero de 2019, a través de la cual la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora CARMEN GUERRERO HURTADO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003 y a título de restablecimiento del derecho solicita la devolución de lo pagado por concepto de pensión de sobrevivientes. Por lo tanto, para efectos de resolver en relación con la medida cautelar solicitada, se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, al cual se hizo referencia anteriormente.



Al respecto, sea lo primero señalar que, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes i) los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, ii) los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Por su parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo siguiente acerca de cónyuge y/o compañero permanente, del causante del derecho pensional:

“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Expresiones “compañera o compañero permanente” y “compañero o compañera permanente” en letra itálica **CONDICIONALMENTE** exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:>
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
Jurisprudencia Vigencia

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
(...)”

Ahora bien, en el presente caso se advierte que el acto administrativo demandado dispuso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al considerar que la señora CARMEN GUERRERO HURTADO, cumplía con los requisitos necesarios para ser beneficiaria de dicha prestación, teniendo precisamente como disposiciones aplicables la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, más aún cuando la Resolución No. SUB 2228 del 08 de enero de 2019, señala lo siguiente: “Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Decreto 758 de 1990, se surtió la publicación del edicto emplazatorio No. 127 de 2018, por el término de un mes, con



el fin de que se hicieren presentes a reclamar el derecho sobre la presente prestación, quienes se consideren pretendidos beneficiarios, según lo definido en el artículo 47 de la precitada Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.”

Por lo anterior se concluye que, del simple análisis del acto demandado y su confrontación con las normas invocadas en la demanda, no es posible inferir la violación de tales preceptos normativos, luego entonces, en el presente caso la medida cautelar solicitada no resulta procedente, en los términos del inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, citado anteriormente.

En este estadio del proceso, se itera, no existen elementos de orden fáctico que lleven a concluir una posible afectación de las normas sobre las cuales debe fundarse el acto acusado y por contera una violación de los intereses públicos invocado como fundamento de la medida cautelar. Tampoco existe un riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Al contrario, el Despacho destaca que dentro de la presente Litis se debate la nulidad de un acto administrativo a través del cual se reconoció una pensión de sobrevivientes a la demandada en calidad de cónyuge del causante, lo que implica que, acceder a la solicitud de la entidad demandante, podría afectar los derechos fundamentales de la accionada tales como el mínimo vital, salud, dignidad humana y el debido proceso, máxime cuando no se encuentra probado que ella disponga de otros recursos.

Conforme a las anteriores razones, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar, por cuanto se encuentra necesario evaluar la situación de quien percibe esta prestación económica con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logre recaudar, valorándolas en la etapa procesal correspondiente.

En razón a lo anterior, este despacho

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR** la solicitud de suspensión provisional de la Resolución SUB 2228 de 08 de enero de 2019, presentada por la entidad accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente decisión, ingrese de nuevo el expediente al Despacho, para continuar con el trámite procesal que corresponda.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ



A.O.-

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo

010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2db396f6c7ea8601024ca218acffd2e9a8ce7f2cd235ead8b3ea4c6cdfa6a393**
Documento generado en 07/04/2022 08:53:48 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>